Editoriales -

UNIVERSIDAD: PRESIONAR AL MINISTERIO

-No cabía esperar una contradicción tan manifiesta como la que separa en estos días la esperanza popular de los laboratorios políticos con respecto a la cuestión universitaria de Las Palmas.

En su momento celebramos que esta reivindicación, a nuestro juicio -que mantenemos y ratificamos- totalmente espontánea, fuera elevando sus niveles de articulación y representatividad desde las formulaciones académicas hasta los planteamientos políticos, pasando por la útil pero invertebrada fase de algunas iniciativas aglutinadoras, como las del Gabinete Literario y la Coordinadora de Apas. Ahora tenemos que preguntarnos honestamente si ese recorrido fue el adecuado, puesto que los llamamientos unitarios y las unanimidades del principio, nunca impugnadas ni contradichas salvo por la excepción ya conocida, se han desintegrado incomprensiblemente al pasar la barrera no del sonido sino de la sordera políti-

El acuerdo de la Junta de Canarias, emitido sin que nadie lo pidiese, no fue más que la cristalizaci6n de una voluntad preexistente en determinadas fuerzas políticas. La absoluta falta de tacto y sensibilidad que acusa podría movernos a desaliento si no se dieran condiciones objetivas para que, a pesar de todo, salga adelante la reivindicación universitaria de Las Palmas. Esas condiciones son, fundamentalmente, la firmeza de la exigencia popular, ahora potenciada por el componente de rebeldía contra una determinación arbitraria; la reafirmación de actitudes por parte de las entidades que dieron origen a este general y masivo movimiento; y el apoyo, pese a todo, de las fuerzas políticas que, incoherentes en otros problemas, han sabido demostrar en éste una radical consecuencia con el soberano sentir de la sociedad.

Tenemos que desdecirnos, desgraciadamente, de nuestro optimismo referido a la capacidad de convocatoria unitaria de todas las tendencias e ideologías cuando vibra en la causa propuesta la unanimidad de la voz popular. Tristemente, no hemos alcanzado esa madurez, aunque no desesperamos de llegar algún día a ella. Estamos seguros de que los sectores organizados que se mantienen fieles a la causa universitaria podrían convocar, si lo entendieran oportuno, una manifestación tan gigantesca o más que la del pasado 7 de julio. La respuesta a los boletines de adhesión a la Universidad de Las Palmas que venimos publicando atestigua que, aún con el factor reductor de traducir en letra impresa, filiación y firma lo que fuera presencia fisica en la manifestación, esta exigencia tiene en nuestro pueblo todas las características de lo irrenunciable. Millares y millares de adhesiones llegan a nosotros, por correo, directamente o por los medios más insólitos, y cada día crecen los envíos en una escalada cuyo tope aún no es posible prever.

Pero es necesario hacer recapitulación de lo sucedido hasta el momento, estudiar los aciertos y los posibles errores y partir del punto preciso para recomponer la reivindicación en sus planteamientos originales y hacerla valer por las vías que se demuestren auténticamente operativas. Ha quedado de manifiesto que el camino político es impracticable a escala regional, y que la regionalidad deberá nacer de una estricta igualdad sin rebajas para nadie. Más grave aún es el hecho de que un «intento» de solución regional parece haber sido pretexto para reactivar el sempiterno juego de la Administración con Canarias, en que se dice a unos una cosa y a otros la contraria para que en el proceso de esclarecer quién va mejor situado se pudran y corrompan los problemas. ¿Era esto lo que perseguían quienes prepararon y votaron en el pleno de la Junta de Canarias aquel acuerdo ignorante e indocumentado en el que parecían jugarse el ser o no ser de su responsabilidad política? Seguramente no, pero el sarcasmo del juego centralista les alcanza de lleno, como también a los demás. Y si no sabemos exigir a la Administración, la causa está perdida. El objetivo es ahora el Ministerio de Educación y a él hay que dirigir todas las presiones. No perdamos más el tiempo ni nos dejemos enredar en la estrategia de los aplazamientos.

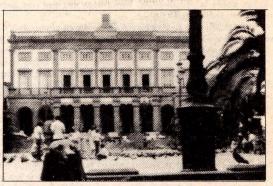
AYUNTAMIENTO: SEDE VACANTE

-La dimisión del alcalde de Las Palmas denota una vez más las incongruencias que el metabolismo de los partidos políticos introduce en el crecimiento de la democracia. Parece especialmente irritante que la estabilidad teórica prevenida en la Constitución por periodos de legislatura de cuatro años, se reduzca a tres para vivir en el último todos los corrimientos posicionales de las conveniencias electoralistas. El sistema no puede permitirse perder uno de cada cuatro años en problemas que superponen a las necesidades comunes las previsiones de voto de los partidos. Si en la dimensión del Estado ya estamos viviendo con excesiva anticipación la turbulencia de unos acontecimientos irregulares que tienen más que ver con los conflictos partitocráticos que con la realidad social, en Las Palmas padecemos desde hace meses el «valor» añadido de una situación difícilmente justificable al margen de las cuentas y los números que cada comité se haya hecho de cara a la próxima consulta electoral. La suspensión de la eficacia política y administrativa en base a presuntas tendencias de voto es perfectamente legítima a partir del momento en que una disolución legislativa instaura el régimen de provisionalidad previo a los comicios; pero una anticipación de meses representa una grave falta de respeto hacia los intereses ciudadanos.

Se ha consumado la dimisión del alcalde Rodríquez Doreste, en un proceso que no requiere de mayores clarificaciones porque se ha desarrollado a la vista del común. No nos gustan las motivaciones, pero, por encima de esto, nos preocupan profundamente. De todos los modelos democráticos en presencia, el menos indicado para la realidad psicológica y sociopolítica de nuestro país es el italiano, cuva permanente inestabilidad sería dinamita para el sistema español cuando, a pesar de los esfuerzos, nadie puede dar por consolidada la convivencia democrática.

Pero incluso en Italia ocurre que la inestabilidad política no convulsiona la continuidad administrativa, cuyo decurso se respeta en la medida suficiente como para no provocar quiebra ni fisura en las convicciones democráticas de la ciudada-

Aguí hemos visto que una fórmula de normalidad pactada para la administración de la capital ha sucumbido víctima de intereses políticos unilaterales sin paralelo en otras capitales del Estado



con similar contextura en los gobiernos municipales. Es un dato que debe movernos a reflexión, porque cuando el Estado y las mismas estructuras regionales están sometidos al peligroso vaivén que conocemos, sólo falta que el estamento administrativo más inmediato al ciudadano, el Ayuntamiento, entre en la misma danza para que comiencen las preguntas capciosas sobre la idoneidad del sistema.

Hay que reconocer que el gobierno municipal presidido por Juan Rodríguez Doreste consiguió no sólo un periodo -demasiado breve, justo es decirlo- de estabilidad sino un incremento de la confianza social en la institución municipal a través de un pacto que solo es posible en democracia. Su figura personal resulta fortalecida de ese proceso, a pesar de la dimisión final. Merece gratitud por cuanto ha podido hacer encabezando la coalición de gobierno, y admiración por su talante de luchador insobornable, del que sigue haciendo gala en las declaraciones que ofrecemos en esta misma edición.

Pero sería incorrecto no constatar un sentimiento de decepción en la ciudad por este absurdo final de una etapa constructiva; sería irresponsable no hacerse eco del peligro implícito en estas experiencias; y sería, finalmente, culpable, no advertir seriamente a los políticos que no jueguen con las cosas del común, porque si ellos existen es para servirlas El Ayuntamiento no es un foro para el ejercicio dialéctico sino un órgano en que la política debe traducirse en gestión. De cómo sucedan las cosas en su seno hasta las próximas elecciones locales, dependerá, sin duda, el rumbo del voto, que en este momento no sonríe precisamente a quienes han provocado esta situación.

- LA PROVINCIA